

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 493/2003.

**Ponente:** Ilmo. Sr. D. Angel Santiago Martínez García.

**DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS:** Alcance: derecho a la publicidad de los juicios: no es un derecho absoluto: puede ser limitado o excluido por razones de moralidad, orden público y seguridad nacional en una sociedad democrática; Vulneración inexistente: celebración de juicio a puerta cerrada, sin acceso de público: delito de revelación de secretos relativos a la seguridad por parte de un funcionario de prisiones; Inobservancia de plazo para formular escrito de conclusiones provisionales por el Ministerio Fiscal: irrelevancia; Autos de imputación que contienen un relato somero de los dos hechos imputados y de su calificación jurídica.

**INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y VIOLACION DE SECRETOS:** Autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados: existencia: funcionario de prisiones que acude a los medios de comunicación para informar que el centro penitenciario ha sufrido una avería en sus medidas de seguridad manifestando la carencia de las correspondientes alarmas: información inveraz: incumplimiento de la obligación de no divulgación.

**INJURIA:** concepto; requisitos; Graves con publicidad: existencia: funcionario de prisiones que manifiesta a un periodista que el director del centro hace dejación de sus funciones tildándole de incompetente con el fin de que lo publique: ofensas gratuitas que no expresan un deseo de denunciar o criticar la labor del director.

*El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Valladolid mediante Sentencia de fecha 21-04-2003 condenó al acusado como autor de un delito contra la Administración Pública, a la pena de doce meses de multa con una cuota diaria de 8 euros e inhabilitación especial para el empleo público como funcionario de prisiones durante un año y de un delito de injurias graves, a la pena de multa de seis meses con idéntica cuota diaria.*

*Contra la anterior Resolución el acusado interpuso recurso de apelación.*

*La Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid mediante Sentencia de fecha 10-07-2003 **desestima** el recurso interpuesto y confirma íntegramente la Sentencia recurrida.*

En Valladolid, a diez de julio de dos mil tres.

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto, en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Valladolid, por delitos contra la Administración Pública y de injurias, seguido contra Serafín, defendidos por el Letrado D. José María Tejerina Rodríguez, y representado por el Procurador Don Carlos Sastre Matilla, siendo partes, como apelante el mismo antes citado, y como apelados el Ministerio Fiscal, y Don Juan Ramón, representado por la Procuradora Doña Monserrat Pérez Rodríguez y defendido por el Letrado Don Enrique Ruiz Otazo, actuando como Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Angel Santiago Martinez Garcia.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO** El Juez de lo Penal núm. 1 de Valladolid con fecha 21.04.03 dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

«El día 2 de mayo de 2002, alrededor de las 19,30 horas, por efecto del aparato eléctrico de una tormenta se produjo una sobrecarga en la red eléctrica del Centro Penitenciario de Valladolid, que afectó a la tarjeta de comunicación entre las barreras microondas del recinto y el ordenador que controla el funcionamiento de las mismas, no afectando al resto de los sistemas de seguridad del centro (circuito cerrado de televisión, vídeo sensores, etc.) que funcionaron correctamente, pudiéndose a través de estos medios realizar la vigilancia perimetral

del centro al cubrir las cámaras la totalidad del pasillo de ronda. Por el servicio de mantenimiento del centro al cubrir las cámaras la totalidad del pasillo de ronda. Por el servicio de mantenimiento del centro penitenciario se dio aviso a la empresa Ferrosier, SL que a su vez requirió los servicios de la entidad Conelecsis, SL que era la que había diseñado el sistema informático del centro, y tras realizar los trabajos pertinentes, a las 19 horas del día 10 de mayo de 2002 se restableció el correcto funcionamiento de las barreras perimetrales microondas.

Serafín, mayor de edad y sin antecedentes penales, funcionario de prisiones que presta sus servicios en el Centro Penitenciario de Valladolid desde el año 1999, es Delegado Sindical de ACAIP.

El día 6 de mayo de 2002 Serafín llamó por teléfono a Inocencio, periodista de la agencia Europa Press en Valladolid, y le comunicó que desde hacía cuatro días el centro penitenciario se encontraba sin alarmas y que aún no se habían arreglado, y que "sólo quedaban los muros y las alambradas". Inocencio se puso en comunicación telefónica ese mismo día con el Director del Centro Penitenciario, Juan Ramón, para contrastar la información recibida de Serafín, indicándole el Director que "había un problema" sin llegar a especificar de qué se trataba, y apelando a su responsabilidad para que no publicaran la noticia, y tras consultar Inocencio con sus superiores en la agencia, le indicaron que esa información no podía ser difundida en ese momento, poniéndose en comunicación telefónica nuevamente con Serafín, a quien le indicó que no iba a publicar en ese momento la noticia, y quien le contestó que "perfecto", y llamando nuevamente por teléfono al Director del Centro Penitenciario, a quien le indicó que no iba a publicar de momento la noticia, comprometiéndose el Director a llamar a Inocencio una vez que la avería estuviera solucionada.

El día 10 de mayo de 2002, Juan Ramón llamó por teléfono a Inocencio, y le leyó una nota de prensa en la que indicaba que se había producido a consecuencia de la tormenta del día 2 "un fallo en un subsistema del sistema integral de seguridad que opera de forma complementaria con otros, suficientes por sí mismos para detectar cualquier intento de evasión", que en ese momento ya se encontraba solucionado, y que "en ningún momento hubo peligro alguno, ni un descenso en los niveles de seguridad de la cárcel". Nuevamente Inocencio se puso en contacto telefónico con Serafín, a quien le comentó la comunicación que había recibido del Director del Centro Penitenciario, contestándole Serafín que no era cierto que la avería únicamente hubiera afectado a un subsistema del integral de seguridad, sino que se dejó sin servicio a las únicas alarmas con que cuenta la prisión, "sólo quedaban los muros y las alambradas, y si no que me diga alguien si había algún sistema más", calificando a Juan Ramón de "mentiroso" y de "querer hacer cambiar el sentido de la realidad con patrañas", indicando que hubiera sido harto difícil abortar un intento de fuga de algún recluso por la imposibilidad de detectar movimiento en los muros y por el hecho de que las garitas estaban sólo parcialmente ocupadas por guardias civiles, pese a lo cual "el director no ha solicitado refuerzos al delegado del Gobierno, lo que es una dejación de funciones y un ejemplo más de su incompetencia", añadiendo que "seguro que si se hubiera fugado algún preso el marrón se lo comían los funcionarios". El día 12 de mayo de 2002 se publicó en los diarios "El Mundo de Valladolid", "El Día de Valladolid" y "El Norte de Castilla" la noticia relativa a que la prisión de Villanueva permaneció ocho días sin alarmas antifugas por una tormenta, y en los dos primeros se incluían, en el cuerpo de la noticia y entrecomilladas, las manifestaciones de Serafín relativas al Director del Centro Penitenciario».

**SEGUNDO** La expresada sentencia estimó que los hechos probados eran constitutivos de un delito contra la Administración Pública y otro delito de injurias graves, y cuya parte dispositiva dice así:

«Que debo condenar y condeno a Serafín como autor de un delito contra la Administración Pública del artículo 417.1 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) y b) un delito de injurias graves de los artículos 208 y 209 del mismo texto legal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de doce meses multa (con una cuota diaria de 8 euros) e inhabilitación especial para el empleo público como funcionario de prisiones durante un año por el delito a) y seis meses de multa (con una cuota diaria de 8 euros) por el delito b), y al pago de las costas procesales, incluidas las de la Acusación Particular. Serafín deberá indemnizar a Juan Ramón en la cantidad de 1.500 euros, que devengará el interés previsto en el artículo 576 de la LECiv ( RCL 2000\34, 962 y RCL 2001, 1892) . Firme esta resolución procédase a costa del condenado a la publicación del encabezamiento y parte dispositiva de la presente resolución en los diarios "El Día de Valladolid" y "El Norte de Castilla", en las mismas páginas y con idénticos caracteres tipográficos a los empleados en las noticias aparecidas el día 12 de mayo de 2002».

**TERCERO** Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal de Serafín, que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias oportunas y previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

**CUARTO** Como fundamentos de impugnación de la sentencia, se alegaron sustancialmente los siguientes:

-Nulidad de las actuaciones por vulneración a un proceso con todas las garantías y por vulneración del principio de legalidad.

-Vulneración, por aplicación indebida del artículo 417.1 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .

-Vulneración, por aplicación indebida del delito de injurias graves con publicidad de los artículos 208 y 209 del Código Penal.

## HECHOS PROBADOS

Se admiten y esta Sala hace propios los hechos declarados probados por la sentencia de instancia.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida.

**PRIMERO** El primer argumento del recurso de apelación está basado en la alegación de que se ha vulnerado el derecho a un proceso público con todas las garantías, con cita del artículo 24.2 de la Constitución Española ( RCL 1978\2836) .

Todo ello se basa en la decisión adoptada por el Juzgado de lo Penal en su Auto de fecha 03.04.03 por el que se acordó la celebración del juicio a puerta cerrada, sin acceso de público a la Sala, lo que provocó que por la defensa del acusado se planteara al inicio del Juicio Oral como cuestión previa la misma cuestión que aquí ahora nos plantea, y que fue desestimada por la Juzgadora del Juzgado de lo Penal.

Partiendo de la consideración de que los juicios han de celebrarse bajo los principios generales en la celebración de todos los procedimientos, entre los que está el principio de publicidad, entiende la parte apelante que no concurren en este caso motivos que justifiquen la celebración del juicio a puerta cerrada por los argumentos que seguidamente pasamos a analizar.

1.-En el Auto de fecha 03.04.03 se argumentaba la posibilidad de que en el juicio se pudieran formular preguntas acerca de la seguridad activa y pasiva del Establecimiento Penitenciario, y con la celebración a puerta cerrada se trataba de evitar la «reiteración» del presunto delito de revelación de secretos (por el que se había formulado la acusación), cuando lo cierto es que hasta el dictado de dicho Auto toda la instrucción de la causa se había llevado a cabo sin restricción alguna de publicidad, y la decisión se adoptó sólo cuando así lo pidió el denunciante.

Pero la realidad es que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16) se distingue claramente el régimen de la publicidad de la fase instructora y la publicidad del juicio oral, dado que en la instrucción predomina el principio del secreto de las actuaciones (artículo 301 de la Ley), si bien existe una publicidad relativa de las partes personadas (artículos 302 de la LECrim y 234 de la LOPJ [ RCL 1985\1578, 2635] ), salvo que el Juez de Instrucción decreta el secreto del sumario (art. 302 citado), en cuyo caso el principio de publicidad es restringido incluso para las partes. Por el contrario la fase del juicio oral está presidida por el principio de publicidad (art. 680 de la Ley), con las limitaciones señaladas en el mismo precepto, que son precisamente las acogidas en este caso por la Juzgadora de instancia para haber decretado que el Juicio fuera celebrado a puerta cerrada. Por lo tanto en este caso a lo largo de todo el proceso, instrucción y juicio oral, estuvo limitada la publicidad de las actuaciones, precisamente por la naturaleza de uno de los delitos que se estaban investigando y enjuiciando.

2.-Por muy sofisticados que quisieran presentarse los sistemas de seguridad del Establecimiento, entiende la parte que el esquema de seguridad de un Establecimiento Penitenciario es notorio y conocido por la generalidad de los ciudadanos, y considera que no se reveló ningún secreto ni durante la instrucción, ni durante la celebración del juicio, porque no había ningún secreto que revelar, y si hubiera habido alguna pregunta que afectara al secreto o a la seguridad del Establecimiento, hubiese podido ser declarada impertinente por la Juzgadora.

Pero lo cierto es que el delito objeto de enjuiciamiento estaba relacionado precisamente con la revelación por un funcionario de Instituciones Penitenciarias de los sistemas de seguridad de un Centro Penitenciario, y con su falta de funcionamiento, medidas de seguridad que, sin perjuicio de su sofisticación, son esenciales para la seguridad de los internos e incluso para la seguridad de los propios funcionarios, y dado que el juicio y la prueba tendrían necesariamente que versar sobre los sistemas de seguridad del Establecimiento Penitenciario, sobre su funcionamiento y sobre algunas de sus deficiencias, resulta claro que ello podía afectar a la seguridad del Establecimiento Penitenciario, y por extensión a la seguridad de todo nuestro Sistema Penitenciario, que también afecta a cuestiones de orden público, y era preferible que estas cuestiones, respecto de las que es conveniente mantener el correspondiente sigilo, no fueran conocidas públicamente.

3.-Considera la parte que no se planteaba ningún conflicto de intereses entre el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, y una hipotética puesta en peligro de la seguridad del Centro, haciendo alusión a que había sido el propio denunciante y director del Centro Penitenciario quien había dado al periodista los tecnicismos que el acusado desconocía y que, obviamente, él no había dado.

Ciertamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal es poco explícita a la hora de determinar los supuestos en los que puede restringirse el ejercicio del derecho a un proceso público, el principio de publicidad, pero tal principio no tiene el carácter de absoluto y puede ser restringido, y a juicio de esta Sala (compartiendo el criterio de la Juez de lo Penal) sí existían razones que justificaban tal limitación, y no es cierto que fuera el Director del Centro Penitenciario quien revelara a los medios de comunicación la existencia de algunos problemas en los sistemas de seguridad del Centro, sino el acusado, lo cual provocó que el Director tuviera que dar las correspondientes explicaciones, precisamente para paliar el impacto causado por el acusado con sus revelaciones a un periodista.

4.-Estima la parte recurrente que el juicio tenía un indudable carácter político sindical y un innegable interés público, dado que entiende que este asunto era la plasmación periodística de un largo enfrentamiento entre el director del Establecimiento Penitenciario y el acusado, que era el Delegado Sindical del sindicato mayoritario de los trabajadores dentro de ese Centro Penitenciario; por ello entiende que no existe conflicto entre un derecho fundamental y una genérica seguridad del establecimiento, y estaba plenamente justificado que el mismo se hubiese celebrado en «audiencia pública», como todos los juicios, y con la presencia de los medios de comunicación, tal y

como se prevé en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ya hemos explicado por qué estaba plenamente justificado que el Juicio se celebrase a puerta cerrada, siendo completamente ajenas a esta causa las diferencias previas que hubiesen podido tener entre el denunciante y Director del Centro Penitenciario, y el acusado, funcionario de dicho Centro y Delegado Sindical, pues de lo que se trata es de enjuiciar unos concretos y determinados hechos imputados al acusado, respecto de los que se estima que sí fue oportuna la celebración del Juicio a puerta cerrada.

Debemos indicar sobre este asunto que compartimos íntegramente la fundamentación jurídica del auto de fecha 03.04.03 dictado por el Juzgado de lo Penal, en el que se hace un estudio exhaustivo de la cuestión planteada para llegar a la conclusión de que en este caso sí es procedente la celebración del Juicio a puerta cerrada.

Se hace eco de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de abril de 1992 ( RTC 1992\65 ), en la que se explica que el derecho a la publicidad de los juicios no es un derecho absoluto, y que existen excepciones a tal principio de publicidad del proceso establecidas en el artículo 232 de la LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635 ) y en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16 ) ; también alude a las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de abril ( RJ 2000\3703 ) y 26 de septiembre de 2000 ( RJ 2000\8100 ) en las que se indica que el derecho del acusado a un juicio público puede ceder ante exigencias de moralidad, orden público, seguridad nacional en una sociedad democrática, perjuicio de los fines de la justicia, protección de la vida privada de las partes o de las personas menores y respecto a la persona ofendida o a su familia, haciendo alusión al artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 ( RCL 1977\893 ) y el artículo 6 del Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 1950 ( RCL 1979\2421 ) .

Y es que no debemos olvidar que uno de los delitos que han sido objeto de enjuiciamiento en esta causa es un delito contra la Administración Pública, dado que se atribuye al acusado y hoy recurrente, en su condición de funcionario de un Centro Penitenciario, haber revelado a un periodista secretos o informaciones relativas a la seguridad del citado Establecimiento, habiendo manifestado concretamente que el citado Centro se había quedado prácticamente sin medidas de seguridad durante un tiempo y que otras eran deficientes (falta de Guardias Civiles en las garitas).

Las mismas razones que han provocado que esta causa siguiera adelante por este delito son las que justificaban que el juicio tuviera lugar a puerta cerrada, pues como ya anticipaba la acusación particular en el escrito en el que solicitó esta falta de publicidad, era su intención dirigir los interrogatorios al examen de las medidas de seguridad del Centro Penitenciario de Valladolid, habiéndose propuesto por todas las partes pruebas testificales que apuntaban a que en el acto del Juicio Oral se les iba a preguntar sobre datos relativos a las medidas de seguridad del Centro y al funcionamiento de los sistemas de seguridad, cuestiones que por obvias razones de seguridad no era conveniente que fueran conocidas por la generalidad de las personas, y menos aún que fueran difundidas a través de los medios de comunicación social.

Por todo ello, este argumento del recurso no puede ser acogido.

**SEGUNDO** Seguidamente la parte recurrente alega la vulneración del principio de legalidad y el derecho a un proceso con todas las garantías, con cita de los artículos 9.3 y 24.2 de la CE ( RCL 1978\2836 ) , basándose en dos argumentos distintos.

El primero de los argumentos en los que fundamenta tal alegación es en el hecho de que estima que el escrito de acusación del Ministerio Fiscal está presentado de forma extemporánea, una vez que había precluido el trámite conferido para solicitar la apertura del Juicio Oral.

Considera que de la lectura de los artículos 237, 241 y concordantes de la LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635 ) se infiere que los plazos procesales son más flexibles para el Órgano Judicial que para las partes, pero para los actos de parte rige el principio de preclusión, salvo las excepciones legalmente previstas. Indica que el artículo 215 de la LECrim ( LEG 1882\16 ) dispone que transcurrido el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión, se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, pues se continuará de oficio el curso del procedimiento en el estado en que se halle, consagrando así los principios de impulso de oficio y preclusión, entendiendo que este mandato legal entronca directamente con el principio de legalidad y de proscripción de la arbitrariedad. Por último hace referencia al artículo 136 de la LECiv ( RCL 2000\34, 962 y RCL 2001, 1892 ) , donde se refleja el principio de preclusión, principio que estima es de aplicación al procedimiento penal por disposición del artículo 4 de dicha Ley.

Los datos que es preciso tener en cuenta para resolver esta cuestión son los siguientes:

-Por Providencia de fecha 30 de diciembre de 2002 el Juzgado acordó conferir traslado de las actuaciones a los efectos preceptuados en el art. 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «princiando» por el Ministerio Fiscal.

-Por la Secretaría del Juzgado de Instrucción se ha certificado que el procedimiento fue remitido a la Fiscalía el día 3 de enero de 2003.

-La Fiscalía evacuó el traslado y realizó su escrito de acusación el día 13 de enero de 2003, entendiendo la parte que está presentado fuera de plazo.

Lo primero que debemos indicar a este respecto es que la legislación a la que tenemos que atenernos, es a la que entonces estaba vigente y es de aplicación a este proceso, dado que la regulación actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 781.3 sí ha previsto la circunstancia de que el Ministerio Fiscal no haya presentado su escrito de acusación en el plazo señalado, instaurando un sistema de preclusión, en los términos que allí se indican.

Por otra parte es de observar que el Juzgado de Instrucción no procedió a dar un traslado simultaneo a todas las acusaciones (Ministerio Fiscal y demás acusaciones personadas), tal y como preveía el artículo 790.1 de la LECrim, sino sucesivo, de tal manera que a la acusación particular se la dio el traslado a los mismos fines por Providencia de 17 de enero de 2003.

Esta Sala considera que la irregularidad procesal no tiene la trascendencia que la parte pretende darla, y que carece de relevancia a efectos de una posible nulidad de actuaciones.

Como nos recuerda la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Secc. 2ª, de 19 de marzo de 1998 ( ARP 1998\1436) , ante una alegación idéntica a la presente indica que la inobservancia del plazo para efectuar su acusación por parte del Ministerio Fiscal en ningún caso debe conducir a declarar la nulidad y el archivo pretendido por la parte, y ello por estimar que al estar obligado el Ministerio Fiscal a solicitar la apertura del juicio oral o bien interesar el sobreseimiento, el Juez de Instrucción, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir conforme a lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría haber señalado al Ministerio Fiscal un segundo término para dicho trámite.

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, secc. 1ª, de 25 de marzo de 1999, al recordarnos que conforme al artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el Ministerio Fiscal el ejercicio de la acusación no es una mera carga procesal, sino que es una obligación legal, en virtud del principio de oficialidad de la acción penal, de ahí que para el Ministerio Fiscal en ningún caso se trate de un plazo preclusivo el señalado en el artículo 27.4 de la LOTJ ( RCL 1995\1515) .

También deben recordarse las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1997 ( RJ 1997\3631) y 21 de julio de 1999 ( RJ 1999\6480) que nos indican:

-Que la complejidad del asunto podía ser una razón para prorrogar el plazo, y que aunque en el proceso penal es obligado el mantenimiento de un orden, unas maneras y unos trámites, ha de evitarse que simples infracciones procesales, más o menos trascendentales desde el punto de vista procedimental, impidan el conocimiento y enjuiciamiento de los verdaderos problemas que se debaten.

-Que el «ius puniendi» del Estado sólo se extingue, por razón del transcurso del tiempo, como consecuencia de la prescripción del delito (o de la acción penal para perseguirlo) y de la prescripción de la pena (o de la acción para ejecutar la pena impuesta), lo cual ocurre cuando transcurren los plazos establecidos legalmente, mucho más extensos que el tiempo que en este caso tardó en calificar el Fiscal.

-Que siendo el Ministerio Público una parte necesaria de nuestro proceso penal, en la fase intermedia, tanto del procedimiento abreviado como del ordinario, es imprescindible que exista su petición de apertura del juicio oral o de sobreseimiento para que el Juez o Tribunal pueda decidir la continuación o no del procedimiento (artículos 632 y 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [ LEG 1882\16] , lo que no quiere decir que el Juez o Tribunal quede vinculado por la petición que haga el Fiscal), y si éste no presenta su escrito en el plazo concedido al efecto podrá apreciársele, corregírsele disciplinariamente, e incluso pedirse a su superior que designe otro funcionario para que despache el asunto, pero no seguir adelante sin petición del Fiscal, por lo mismo que al ser la defensa técnica parte necesaria, no puede, en el procedimiento ordinario, señalarse para juicio oral sin que se haya presentado el escrito de defensa o calificación provisional y si el Letrado designado incumple el plazo para ello podrá apreciársele, corregírsele disciplinariamente, e, incluso en casos extremos, pedirse al Colegio de Abogados su sustitución por otro, pero no seguir adelante sin escrito de defensa, y cuando la Ley ha querido establecer otra consecuencia distinta para el hecho de incumplir el plazo para hacer la calificación provisional lo ha dicho expresamente, como así lo hace el artículo 791 apartado 1 de la LECrim a propósito del procedimiento abreviado.

Trasladando estas consideraciones a nuestro caso, hemos de llegar a la conclusión de que, a pesar de que el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal fuera presentado transcurrido el plazo de cinco días que se le señaló, acogiendo el criterio jurisprudencial antes expuesto, ello resulta irrelevante y no debe producir los efectos pretendidos por el recurrente, y es por ello por lo que tampoco puede ser acogido este argumento del recurso.

**TERCERO** En el siguiente argumento del recurso, también vinculado con la alegación de la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, se indica que con fecha 15 de noviembre de 2002 fue dictado Auto de Imputación en el que se declaraba imputado a Serafín como presunto autor de un delito de injurias graves con publicidad de los artículos 208 y 209 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , pero considera que en este Auto no se contenía los «hechos» ni las «expresiones» que pudieran ser constitutivos de las pretendidas injurias graves. Con fecha 10 de diciembre de 2002 fue dictado nuevo Auto de Imputación por el Juez Instructor, en el que estima que siguen sin recogerse los «hechos» imputados por las injurias graves con publicidad, y se amplía la imputación por un posible delito de revelación de secretos, pero tampoco se dice cuáles pudieran ser tales secretos, es decir, los «hechos» imputados, haciendo simplemente alusión a que el imputado «divulgó a través de los medios referidos información reservada», sin explicarle cuál era esa información, ni por qué es calificada de reservada, entendiéndose por ello que el citado Auto de Imputación es nulo.

Para resolver la cuestión planteada debemos tener en cuenta los siguientes datos:

-La denuncia inicial fue presentada ante el Juzgado de Instrucción por el Ministerio Fiscal, el cual puso en conocimiento del Juzgado los hechos que habían sido comunicados a la Fiscalía por el Ilmo. Sr. Director General de Instituciones Penitenciarias, mediante el envío de copia del expediente disciplinario abierto a Don Serafín, expediente en el que se especificaba que se trataba de una supuesta actuación profesional irregular del citado funcionario, puesta de manifiesto en los artículos periodísticos publicados en unos periódicos de Valladolid, en relación con la vigilancia perimetral del Centro y las manifestaciones contenidas hacia la Dirección, conteniéndose de manera pormenorizada los hechos que se le imputaban (en aquel expediente disciplinario) al funcionario, hechos que en este procedimiento han sido los hechos relacionados con el delito contra la Administración Pública, por revelación de secretos o informaciones, del artículo 417.1 del Código Penal.

-El día 24 de junio de 2002 Don Juan Ramón, Director del Centro Penitenciario de Valladolid, presentó a su vez denuncia contra Serafín, denuncia en la que se relataban pormenorizadamente los hechos que él le imputaba, y que calificaba como un presunto delito de injurias con publicidad.

-El día 10 de septiembre de 2002, dentro de la instrucción, se recibió declaración en calidad de imputado a Serafín, a quien previamente se le informó de sus derechos contenidos en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16) , designando a Letrado y Procurador de su libre designación, siendo preguntado pormenorizadamente acerca de los hechos que habían sido objeto de las dos denuncias y que habían dado lugar a la instrucción de estas diligencias, siendo preguntado tanto sobre los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal, como sobre los hechos relacionados con el posible delito de injurias.

-El día 15 de noviembre de 2002 el Juzgado de Instrucción dictó un Auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, en el que se relataban los hechos siguientes: «Al menos sin contrastar la información previamente recibida de Serafín, éste transmitió a la Agencia de Noticias "Europa Press", a través de su corresponsal, las informaciones literales y textuales que, entrecuilladas, aparecieron en diferentes medios de comunicación de esta ciudad, de entre otros en los Diarios "El Mundo" de Valladolid y "El Día", relativas a una avería, acaecida el 2-5-02, en la intrusión (sic) de las barreras perimetrales del CP de Valladolid», declarando imputado a Serafín como presunto autor de un delito de Injurias Graves con publicidad de los artículos 208 y 209 del CP.

-Con fecha 10 de diciembre de 2002 fue dictado nuevo auto por el que se acordó ampliar la imputación contra Serafín, relatando los siguientes hechos: «Serafín, Funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, destinado en el CP de Valladolid, divulgó, a través de los medios referidos, información reservada», imputándole un delito de revelación de secretos del artículo 417.1 del CP.

Al igual que en el supuesto anterior, la legislación a la que debemos atenernos es a la que estaba en vigor cuando se instruyeron estos hechos, y no a la regulación actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde en los artículos 771.2, 775, y concretamente en el 779.1.4ª de la LECrim se contiene una regulación nueva y distinta sobre la materia de la imputación en el procedimiento abreviado, especificando que en el Auto de transformación de Diligencias en Procedimiento Abreviado ha de contenerse la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan.

La imputación se ha convertido en pieza esencial del proceso penal, en la medida en que a través de ella se determina el sujeto pasivo y se le confiere la condición de parte procesal, y consiste en atribuir a una persona determinada participación criminal en unos concretos hechos que presentan los caracteres de delito.

La imputación, que en todo caso debe efectuarse durante la instrucción, puede provenir de diferentes actuaciones procesales, derivando de todas ellas una imputación y la consiguiente constitución de una persona en la condición de imputado. Así el artículo 118 de la LECrim establece varios medios para hacer patente la imputación con efectos en el proceso, abriendo al imputado el derecho de defensa: la detención, la adopción de otras medidas cautelares, la admisión de la denuncia o de la querella, cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación, y el auto de procesamiento (en el sumario ordinario).

Por tanto la imputación puede provenir (como así ocurre en este caso) de que el Juez de Instrucción asuma las imputaciones que se hayan realizado por los denunciantes en sus escritos de denuncia, efectuándose de manera cierta y efectiva la imputación judicial en el Procedimiento Abreviado con la citación para ser oído.

La citación para ser oído se encuentra regulada dentro de los artículos 486 y 487 de la LECrim correspondientes al sumario ordinario y viene a convertirse en un presupuesto del auto de procesamiento, al que precede, pero dada su naturaleza de procedimiento común, la citación para ser oído es de aplicación en todos los procesos penales, alcanzando una especial relevancia en el Procedimiento Abreviado, dado que en esta actuación se contiene un acto judicial de imputación, puesto que al recibirle el Juez de Instrucción declaración al imputado sobre todos los hechos que se le imputan, le ilustra al sujeto pasivo de la imputación que existe sobre él.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no exigía en el artículo 789.5 Cuarta (como sí exige ahora el artículo 779.1.4ª, tal y como antes hemos indicado, convirtiéndolo en algo similar a un Auto de Procesamiento) que se realizara además una nueva imputación al dictar el Auto de Transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, a pesar de lo cual en nuestro caso el Juez de Instrucción sí efectuó en los dos Autos antes citados un relato de hechos (aunque fuera somero), de los dos hechos que se le imputaban a Serafín y de su calificación jurídica, por lo que no ha habido infracción procesal alguna en el aspecto indicado por el recurrente y es procedente,

igualmente, desestimar este argumento del recurso.

**CUARTO** Los dos últimos argumentos del recurso están vinculados con la condena por los dos delitos imputados, por el delito contra la Administración Pública del artículo 417.1 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777 ) , y por el delito de injurias graves con publicidad de los artículos 208 y 209 del Código Penal, no compartiéndose parte de la declaración de hechos probados que se efectúa en la Sentencia, y no compartiéndose la valoración jurídica que a los mismos se da, pretendiendo que se le absuelva de ambos delitos.

**QUINTO** Analizando en primer lugar el delito contra la Administración Pública del artículo 417.1 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777 ) , en la Sentencia recurrida se considera que el comportamiento del acusado implica la revelación de información de la que tenía conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no debía ser divulgada.

Se parte en la Sentencia de la consideración de que no tiene relevancia a los efectos de la tipificación de la conducta del acusado el que finalmente no se difundiera la información hasta que la avería se encontraba ya reparada, ya que ello obedeció al criterio de la agencia de noticias al ponderar los intereses en juego, pero no a la voluntad del acusado. Se citan unas Sentencias del Tribunal Constitucional en las que se hacía alusión a la emisión de informaciones sindicales que tuvieran por objeto suscitar reivindicaciones o criticar y denunciar determinadas condiciones en la prestación del servicio público, haciendo alusión a que la divulgación de supuestas irregularidades detectadas en el interior de un Establecimiento Penitenciario (como sería este caso) sí reviste interés público, interés que sólo cedería si se tratase exclusivamente, aun dando informaciones veraces, de vilipendiar, humillar o simplemente insultar a las personas de forma innecesaria y gratuita, o se difundiesen datos o asuntos con quebrantamiento del secreto profesional, contravenciones éstas que nunca podrían legitimarse esgrimiendo la libertad de información. Se indica que la avería únicamente afectó a la tarjeta de comunicación entre las barreras microondas del recinto y el ordenador que las controla, uno de los sistemas de control del Centro Penitenciario, funcionando normalmente el resto de los sistemas de Control del Centro, entendiéndose por ello que la información transmitida por el acusado era parcial, sesgada, e inveraz, afectando a un elemento esencial para la seguridad de un Centro Penitenciario, como es el funcionamiento de sus sistemas de control, y la difusión pública de una avería, poniendo en riesgo evidente la seguridad de los funcionarios y de los internos.

En el recurso no se está conforme con el hecho de que se haya dado por probada la afirmación de que no resultaron afectados el resto de los sistemas de seguridad del Centro Penitenciario y que los mismos siguieron funcionando correctamente, siendo suficientes para mantener las debidas medidas de seguridad dentro del Centro; pero la realidad es que en este punto las pruebas a las que alude la parte recurrente no sirven para desvirtuar la valoración que de la prueba practicada ha realizado la Juzgadora de instancia, pues sin perjuicio de los datos que la parte de manera interesada pretende entresacar de ciertas declaraciones e informes, y del Libro de Averías del Centro (que obviamente no contiene un exhaustivo estudio de las medidas de seguridad con las que contaba el Centro Penitenciario), la Juzgadora de instancia ha tenido en cuenta el Informe del encargado de mantenimiento Don Carlos Daniel, el Informe técnico de Coneleccis, SL, y el Informe de instalaciones de Ferroser (empresas encargadas del mantenimiento y reparación de la avería), todos ellos ratificados en el acto del Juicio Oral, de los que se concluye que si bien el aparato eléctrico de la tormenta afectó a uno de los sistemas de control del Centro Penitenciario, fueron afectadas únicamente las alarmas perimetrales, funcionando normalmente el resto de los sistemas de control del Centro, por lo que es preciso compartir en este punto el criterio de la Juzgadora de instancia, sin que quepa modificar el relato de hechos probados en el sentido que había sido interesado.

Ciertamente los funcionarios, y muy concretamente sus representantes sindicales, tienen derecho a denunciar las condiciones de trabajo en las que están efectuando su labor sus afiliados y el resto de los funcionarios, y aun cuando se trate de funcionarios de un Centro Penitenciario se tiene derecho a denunciar o criticar ante la propia Administración Penitenciaria las deficiencias e irregularidades que en el mismo se detecten, a fin de que las mismas sean corregidas y para que sean mejoradas las condiciones de trabajo.

Pero en nuestro caso el acusado va más allá de lo que es la mera crítica o la denuncia (lo cual podría estar dentro de sus labores como representante sindical), y lo que verdaderamente sucede es que el acusado tiene conocimiento en su condición de funcionario público de que se ha producido un hecho completamente ajeno al Centro Penitenciario y que siempre ha sido considerado como un supuesto de fuerza mayor, una tormenta y la caída de un rayo, la cual con su aparato eléctrico ha provocado una sobrecarga en la red eléctrica del Centro Penitenciario, afectando a parte de los sistemas de seguridad del Centro, y en vez de denunciar esta situación ante Instituciones Penitenciarias (eso lo hizo después), lo que hace es acudir a un periodista de una agencia de noticias y le transmite una información inveraz de unos hechos que él podría haber denunciado en el ámbito interno, pero que nunca debió divulgar.

Estimamos que la información que el acusado transmite es inveraz, dado que como se explica en la resolución recurrida la información que el acusado dio el día 6 de mayo de 2002 al periodista (cuando la avería aún no había sido reparada) era la de que el Centro se encontraba sin alarmas, cuando la realidad es que tal información, así contada, era incierta, puesto que como ya se ha explicado lo que había sucedido es que se habían visto afectados parte de los sistemas de seguridad del Centro, pero no todos.

El artículo 64 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero ( RCL 1996\521 y 1522 ) , por el que se aprobó el Reglamento Penitenciario establece que «la seguridad interior de los Establecimientos corresponde, salvo en los casos previstos en la disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria ( RCL 1979\2382 ) , a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el Director del Establecimiento».

Por su parte el artículo 71.2 del citado Reglamento Penitenciario establece que, cuando los funcionarios «detecten alguna anomalía regimental o cualquier hecho o circunstancia indiciario de una posible perturbación de la vida normal del centro, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicios».

Por lo tanto, al acusado en su condición de funcionario del Centro Penitenciario de Valladolid le correspondía el deber de velar por la seguridad interior del Establecimiento Penitenciario, y en el caso de detectar una anomalía, su deber consistía en ponerlo en conocimiento del Jefe de Servicios, a fin de intentar paliarla, y no acudir a los medios de comunicación para informar a todos, incluidos los reclusos, de que el Centro Penitenciario había sufrido una avería en sus medidas de seguridad, y decir, cuando aún no había sido reparada la avería, que el Centro carecía de las correspondientes alarmas.

El art. 80 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 ( RCL 1964\348) (aplicable al caso conforme al artículo 80.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria), es el que contempla el quebrantamiento del deber de sigilo y discreción que se impone a los funcionarios públicos, conducta que constituye una infracción administrativa [art. 7.1. j) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero ( RCL 1986\148) , del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado] o un ilícito penal, según la relevancia del hecho.

Y en nuestro caso compartimos las conclusiones a la que se llega en la Sentencia recurrida de que la información, aparte de ser inveraz, el acusado tenía la obligación de no haberla divulgado, y que además su divulgación adquiere las características de grave, más allá de la mera infracción administrativa, puesto que el propagar a través de los medios de comunicación la afirmación de que un Centro Penitenciario se encuentra sin alarmas y sin medidas de seguridad, cuando la avería sufrida aún no ha sido reparada, implicaba afectar gravemente a la seguridad del citado Centro, dado que ello podría haber supuesto motines o intentos de fuga dentro del Establecimiento, con riesgo evidente para los internos y para los propios funcionarios, y el deber de sigilo del funcionario le obligaba a no revelar el suceso, y menos aún a faltar a la verdad magnificando lo que verdaderamente había sucedido.

Por todo ello, este argumento del recurso tampoco debe ser acogido, compartiéndose la conclusión a la que se llega en la Sentencia recurrida de que los hechos son constitutivos de este delito, por el que se ha producido la correspondiente condena.

**SEXTO** Por último se discute también la condena del recurrente como autor de un delito de injurias graves con publicidad, reiterando los mismos argumentos que ya fueron en su día esgrimidos en la instancia, y que fueron acertadamente resueltos por la Juez de lo Penal en su resolución, ahora recurrida.

El delito de injurias aparece definido en el art. 208.1 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) como «la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación». La citada norma contiene un concepto amplio de injurias en el que caben tanto las imputaciones de hechos como las acciones o expresiones ofensivas o vejatorias. Reproduce casi sustancialmente la redacción del derogado ( RCL 1973\2255) art. 457, aunque en términos de mayor concisión, con la única novedad de incluir expresamente tanto el sentido objetivo o social del honor, cuando se refiere a la «fama», esto es la reputación que una persona tiene ante los demás, como el subjetivo o interno, cuando alude a la «propia estimación», es decir, el juicio que una persona tiene de su propia valía.

Constituye una doctrina ya reiterada que para la existencia del delito de injurias, cuyo bien jurídico protegido lo constituye el honor inherente a la dignidad de la persona, se requiere la concurrencia de dos elementos fundamentales: uno objetivo, constituido por actos o expresiones que tengan en sí la suficiente potencia ofensiva para lesionar la dignidad de la persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación; el concepto de honor debe construirse desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a aquella dignidad personal, constituyendo el honor, desde esta perspectiva, la pretensión de respeto que corresponde a cada persona (natural o jurídica) como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. La acción ha de tener en la injuria un significado objetivamente ofensivo, según los parámetros sociales en los que se efectúe, y es imprescindible que concurra el elemento intencional de lesionar la dignidad, menoscabando la fama o estimación personal.

El elemento subjetivo del injusto en la injuria lo constituye lo que se ha venido denominando «animus injuriandi», que como dolo específico de esta infracción penal, eminentemente tendencial, implica la intención de causar un ataque a la dignidad ajena, es decir, el propósito de ofender la dignidad personal, de menoscabar la fama de las personas o atentar contra su propia estima; la determinación de si concurre o no en el sujeto esa intención o animus, no puede -generalmente- hacerse de modo directo, sino que, por afectar a la esfera íntima de la persona, habrá de inferirse indirectamente a partir de las manifestaciones externas de su conducta debidamente acreditadas, y por tanto atendiendo a la serie de hechos que integran el núcleo del tipo penal y sirven tanto para investigar el ánimo de injuriar, como la gravedad de la injuria. La jurisprudencia ha venido admitiendo la presunción «iuris tantum» del referido ánimo cuando las frases empleadas o conductas realizadas evidencian objetivamente y revisten en sí mismas trascendencia difamatoria; de modo que ciertas expresiones y conductas son de tal modo insultantes o difamantes que el ánimo de injuriar se encuentra ínsito en ellos, y cuando son empleados corresponde a quien los utiliza o realiza demostrar y acreditar que le movía otro ánimo distinto del de injuriar; y así entre los ánimos impulsores del proceder del sujeto capaces de eliminar, neutralizar o desplazar el injuriandi figuran, entre los más caracterizados, el criticandi, narrandi, informandi, defendendi, etc.

Trasladando este cuerpo de doctrina al caso que se enjuicia, hemos de partir del contexto en el que estos hechos se producen, contexto que no es aquel al que se refiere el recurrente en su recurso (las previas relaciones



tensas entre denunciante y denunciado nada tienen que ver con lo aquí sucedido), sino a que por una circunstancia completamente ajena al normal funcionamiento del Centro Penitenciario como es la caída de un rayo, lo que había provocado el que no funcionaran parte de los sistemas de seguridad del citado Centro, el acusado, funcionario de dicho Centro Penitenciario, se puso en contacto con un periodista para poner en su conocimiento la avería existente manifestándole que el Establecimiento se encontraba sin alarmas, lo cual provocó que el Director del CP tuviera que intervenir y hablar con el periodista para paliar los graves efectos que la difusión de tal información (inveraz, como ya antes hemos indicado) podría tener en ese momento, comprometiéndose a dar puntual información al periodista cuando la avería estuviera solucionada. Después, una vez subsanada la avería, el Director del Centro cumpliendo su palabra informó al periodista del problema habido, y de que habían permanecido activos otros sistemas de seguridad, suficientes para mantener la debida seguridad del Centro, y cuando esta información es contrastada por el periodista con el acusado Serafín, éste le dice al periodista, a fin de que fuera difundido por los medios de comunicación (como así sucedió el día 12 de mayo de 2002) que no era cierto que la avería fuera únicamente la indicada por el Director, sino que quedaron sin servicio las únicas alarmas de la prisión, quedando «sólo los muros y las alambradas», burlándose de la información dada por el Director al decir: «y si no que me diga alguien si hay algún sistema más», calificando a Don Juan Ramón (el Director de la prisión) de «mentiroso», de «querer hacer cambiar el sentido de la realidad con patrañas», indicando que hubiera sido harto difícil abortar un intento de fuga de algún recluso, por la avería, y por el hecho de que las garitas estaban sólo parcialmente ocupadas por guardias civiles, pese a lo cual «el director no ha solicitado refuerzos al Delegado del Gobierno, lo que es una dejación de funciones y un ejemplo más de su incompetencia», añadiendo que «seguro que si se hubiera fugado algún preso el marrón se lo comían los funcionarios».

Lo sucedido, a diferencia de lo que se alega en el recurso, no se trata de denunciar el mal funcionamiento de la prisión ni la actuación de su Director, con la que no se estuviera conforme (para eso se hubiera denunciado ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias), ni se trata de la confrontación de dos versiones en un debate entre dos posturas, respecto de dos personas que se encuentran enfrentadas, sino que se parte de que el acusado había realizado una conducta delictiva previa, consistente en revelar información que afectaba a la seguridad de un Centro Penitenciario a un periodista para que éste la difundiera, y el Director del Centro se vio obligado a intervenir para paliar la información dada por el acusado, y cuando informa al periodista de lo que verdaderamente había sucedido, el acusado lo que hace es burlarse de sus palabras, llamarle mentiroso, atribuir al Director del Centro que no todas las garitas estuvieran ocupadas por Guardias Civiles (cuando la realidad es que no se sabe el motivo de tal circunstancia), diciendo públicamente que el Director del Centro hace dejación de sus funciones, tildándole de incompetente, y asegurando que de haber habido algún incidente (un «marrón»), les hubiera echado la culpa a los funcionarios, manifestaciones que no se realizan con un afán de informar (con todas esas palabras no se está informando de nada), ni tampoco con un deseo de denunciar o criticar la labor del Director del Centro, sino que aprovechándose de la desgracia habida (el rayo y la avería parcial de los sistemas de seguridad), tras haber provocado él indebidamente que los hechos llegaran a conocimiento de los medios de comunicación, y después de haber provocado que el Director del Establecimiento tuviera que intervenir e informar a los medios de lo verdaderamente sucedido, lo que hace el acusado es ofender gratuitamente al Director en los términos expuestos, empleando para ello los medios de comunicación dado que lo que hizo fue decírselo al periodista que venía cubriendo la información a fin de que publicara sus palabras, con un claro deseo de ofender e injuriar al Director del Centro Penitenciario, por lo que se comparte que sí concurren todos los elementos configuradores de este tipo delictivo, y muy concretamente la existencia del «animus injuriandi» en la conducta del acusado, por lo que de igual modo el recurso de apelación no puede ser acogido en este punto, dado que se comparte plenamente el pronunciamiento condenatorio de la resolución recurrida.

Procede, en consecuencia, la íntegra desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

**SÉPTIMO** En atención a lo expuesto, y de acuerdo con los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16) , procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas de esta alzada.

### **FALLO**

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Serafín contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Valladolid en el procedimiento de que dimana el presente Rollo de Sala, debemos CONFIRMAR, como CONFIRMAMOS, mencionada resolución en todas sus partes, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas en esta alzada.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese este rollo, previa nota.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.**-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Angel Santiago Martínez García, estando celebrando audiencia pública el día diez de julio de dos mil tres. Doy fe.

### **Disposiciones Estudiadas:**

Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre.CÓDIGO PENAL (RCL 1995\3170)

- Art. 208
- Art. 209

## Relaciones Activas:

- Cita. Sobre el derecho a la publicidad de los juicios. STS Madrid 26 septiembre 2000. (RJ 2000\8100)
- Cita. Sobre el derecho a la publicidad de los juicios. STS Madrid 05 abril 2000. (RJ 2000\3703)
- Cita. Sobre el plazo para formular acusación por parte del Ministerio Fiscal. STS Madrid 21 julio 1999. (RJ 1999\6480)
- Cita. Sobre el plazo para formular acusación por parte del Ministerio Fiscal. STS Madrid 06 mayo 1997. (RJ 1997\3631)
- Cita. Sobre el plazo para formular acusación por parte del Ministerio Fiscal. SAP Asturias 19 marzo 1998. (ARP 1998\1436)

## Voces:

NULIDAD DE ACTUACIONES  
NO DEBE ESTIMARSE

Inobservancia de plazo para formular escrito de conclusiones provisionales por el Ministerio Fiscal:

irrelevancia:

[F. 2]

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y VIOLACION DE SECRETOS

Figuras delictivas

Autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados

Debe estimarse

Funcionario de prisiones que acude a los medios de comunicación para informar que el centro penitenciario ha sufrido una avería en sus medidas de seguridad manifestando la carencia de las correspondientes alarmas: información inveraz: incumplimiento de la obligación de no divulgación:

[F. 5]

INJURIA

Figuras delictivas

Doctrina general

Concepto:

[F. 6]

Requisitos:

[F. 6]

INJURIA

Figuras delictivas

Graves con publicidad

Debe estimarse

Funcionario de prisiones que manifiesta a un periodista que el director del centro hace dejación de sus funciones tildándole de incompetente con el fin de que lo publique: ofensas gratuitas que no expresan un deseo de denunciar o criticar la labor del director:

[F. 6]

DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS

Doctrina general

Alcance

Derecho a la publicidad de los juicios: no es un derecho absoluto: puede ser limitado o excluido por razones de moralidad, orden público y seguridad nacional en una sociedad democrática:

[F. 1]

DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS

Vulneración

No debe estimarse

Celebración de juicio a puerta cerrada, sin acceso de público: delito de revelación de secretos relativos a la seguridad por parte de un funcionario de prisiones:

[F. 1]

Inobservancia de plazo para formular escrito de conclusiones provisionales por el Ministerio

Fiscal: irrelevancia:

[F. 2]

Autos de imputación que contienen un relato somero de los dos hechos imputados y de su calificación jurídica:

[F. 3]

## Notas de Redacción:

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales. Editorial Aranzadi no se hace responsable de los errores que en materia de Protección de Datos de Carácter Personal pudiera adolecer esta versión oficial.

### Disposiciones Aplicadas:

- Real Decreto 190/1996, de 9 febrero (RCL 1996\521)- art. 64: norma aplicada Sobre la seguridad interior de los establecimientos penitenciarios en fundamento 5.
- Real Decreto 190/1996, de 9 febrero (RCL 1996\521)- art. 71.2: norma aplicada Sobre la seguridad interior de los establecimientos penitenciarios en fundamento 5.
- Decreto 315/1964, de 7 febrero (RCL 1964\348)- art. 80: norma aplicada Sobre el deber de sigilo de los funcionarios públicos en fundamento 5.